



DISEC

GUIA DE ESTUDIO

COMISIÓN DE DESARME Y SEGURIDAD INTERNACIONAL

GUIA DE ESTUDIO DISEC

Estimados Delegados,

Les doy la bienvenida al comité de DISEC en AMUN 2025. Desde la Mesa, queremos invitarlos a aprovechar y desarrollar todas las oportunidades de aprendizaje que encuentren en el modelo; a actuar y evitar que las discusiones permanezcan enclaustradas en el trabajo de sesión, a trabajar por ese mundo mejor que planteamos, argumentamos y en el que creemos, pues así el trabajo que desarrollemos será verdaderamente significativo y el aprendizaje real. Espero, así mismo, que el nivel del debate sea evidencia de la preparación e investigación desarrollada por ustedes. Les recuerdo que la guía es una herramienta valiosa para orientar la investigación, pero es necesario profundizar en esta con el fin de sobresalir.

Uno de mis objetivos en este modelo es también aprender de ustedes, aprender cómo las diferentes mentes, personalidades y delegaciones pueden construir soluciones a problemas complejos que hoy día se encuentran en el centro de la discusión entre la comunidad internacional. Personalmente, desde la Mesa estaré dispuesto a ayudarles con lo que necesiten, pues considero que el rol de la Mesa no es solo el de moderar la sesión, sino también el de servir y formar a los delegados presentes en su comité. Sin más, les reitero la bienvenida a AMUN en su edición 2025 y específicamente a su comité, DISEC. Muchas gracias,

◆ Historia y Estructura del Comité:

-Origen y Fundación:

La Asamblea General es uno de los principales órganos del sistema de la Organización de Naciones Unidas, establecida bajo el Capítulo 3 y guiada bajo el Capítulo 4 de la Carta. Está compuesta por seis comisiones principales que se encargan de discutir las diferentes temáticas relevantes para la Asamblea y la Organización. En lo que respecta su estructura, la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional (DISEC) es la primera Comisión de la Asamblea General,



se encarga de abordar las cuestiones de desarme, las problemáticas y amenazas mundiales a la paz, que por su envergadura afectan de manera transversal a toda la comunidad internacional y generan desafíos para la seguridad internacional. La primera Comisión, considera todas las cuestiones de desarme y seguridad internacional, que se encuentran dentro del alcance de la Carta o relacionadas con los poderes y las funciones de cualquier otro órgano perteneciente al sistema de Naciones Unidas. Entre los principales objetivos y principios mediante los cuales se guía DISEC, se encuentra primordialmente la cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como abordar las cuestiones de desarme y regulación de los armamentos, la promoción de acuerdos internacionales de cooperación y medidas para fortalecer la estabilidad mediante niveles más bajos de armamentos (ONU, 2017).

Dentro de sus competencias, la primera Comisión, como parte de la Asamblea General y según el artículo 11 de la Carta, está en el derecho de “considerar los principios generales de cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluidos los principios que rigen el desarme y la regulación del armamento” (ONU, 1945) y, posteriormente, de aprobar resoluciones que recomiendan acciones para solucionarlos. A su vez, como las otras comisiones de la Asamblea General, DISEC no tiene la competencia para imponer sanciones, autorizar intervenciones armadas o aprobar resoluciones vinculantes. Sin embargo, la Comisión puede hacer recomendaciones a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad sobre qué debe hacerse en un tema en específico (UNA-MN, 2014).

-Estructura del Comité:

La Primera Comisión, al pertenecer a la estructura de la Asamblea General y de la Organización de Naciones Unidas, se rige dentro del alcance de la Carta de las Naciones Unidas y trabaja en estrecha cooperación con otras comisiones de la Organización, como la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU – UNODA-, la Conferencia de Desarme y el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme -UNIDIR- (ONU, 2017).



La Comisión de Desarme y Seguridad, al ser la primera Comisión de la Asamblea General, incluye como miembros a todas las naciones que son Estados Miembros de las Naciones Unidas. Esto se debe a que según la Carta de la ONU todos los Estados Miembros y observadores de las Naciones Unidas son automáticamente parte de la primera Comisión de la Asamblea General y tienen derecho a un voto (UNA-MN, 2014).

En la actualidad, la Comisión cuenta con protagonismo y es una de las principales dependencias dentro de la Asamblea General y el Sistema de Naciones Unidas. Esto debido a la preponderancia de sus temas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El 15 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la sesión anual de la Comisión, en este caso fue la Sesión número setenta y dos (72) de DISEC, en la cual se abordaron problemáticas principalmente sobre el desarme y el papel de los avances tecnológicos en los armamentos.

-Acciones Importantes:

Durante su historia, entre los mayores logros y objetivos cumplidos de la Comisión se encuentran:

» La primera Resolución de la Asamblea General, titulada “Establecimiento de una Comisión para tratar los problemas planteados por el descubrimiento de la Energía Atómica”, fue adoptada por recomendación de la Primera Comisión el 24 de enero de 1946 en Londres.

» Las Resoluciones de la Asamblea General sobre: el desarme general y completo (1378), las pruebas nucleares francesas en el Sahara (1379), la prevención de una mayor difusión de armas nucleares (1380), la suspensión de ensayos nucleares y termonucleares (1402) y la cooperación internacional en el uso pacífico del espacio ultraterrestre (1472). Todas estas fueron adoptadas en 1959.

» El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), adoptado en 1970 y ratificado por cerca de 190 Estados.

» Actualmente, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 y ha sido ratificado por 83 Estados.



-Expectativas del Comité:

El requisito básico del DISEC es la lucha por el cese inmediato de todos los combates y acciones violentas contra civiles, personal de seguridad e instalaciones. Es esencial que se establezcan métodos seguros y claros para la entrega voluntaria de todas las armas de fuego y balas en su propiedad. Esto abarca todo tipo de armas, bombas y cualquier otro artículo utilizado en la guerra; es indispensable aplicar el repertorio de prácticas de la primera comisión y sus resoluciones previas para comprender qué estrategias son adaptables a la situación de Haití.

Es crucial separar completamente cualquier actividad vinculada al crimen organizado internacional, como el contrabando de drogas, el contrabando de armas, el contrabando humano y el secuestro. Estas acciones no solo perjudican a Haití, sino que también causan daños severos para la seguridad local y global.

Una de las medidas a nivel internacional que deben revisar exhaustivamente es la ejecución del desarme, la desmovilización y las iniciativas de reintegración (DDR) para las personas que optan por abandonar sus actividades criminales. De acuerdo al contexto de Haití, ¿por qué esta herramienta siendo una de las más utilizadas del repertorio de las naciones unidas en cuanto a desarme no ha podido llevarse a cabo de manera exitosa en el territorio?

◆ Historia del Problema:

Los Orígenes de la Crisis (Siglo XX - 2004)

La criminalidad en Haití no es un fenómeno nuevo, pero su escalada moderna tiene raíces en décadas de inestabilidad política, pobreza extrema y gobiernos corruptos. Durante el siglo XX, el país sufrió bajo dictaduras brutales, como la de François Duvalier ("Papa Doc") y su hijo Jean-Claude ("Baby Doc"), que usaron bandas armadas (Tonton Macoutes) para aterrorizar a la población. Tras la caída de los Duvalier en 1986, Haití vivió periodos de golpes de estado y gobiernos débiles, creando un vacío de poder que permitió el surgimiento de grupos delictivos.

Después de una situación de inestabilidad y fragilidad política tan alarmante, por parte de la ONU se decidió encabezar una misión que apoyara a las instituciones



existentes en Haití a través de reforzar la situación de seguridad general y se realizó inicialmente con la creación de Fuerza Multinacional Provisional en Haití (FMP) la cual fue una fuerza militar internacional que operó en Haití entre 2004 y 2006, tras el exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide. Su objetivo principal era restablecer el orden y la seguridad en el país, que se encontraba en crisis. La FMP fue un precursor de la posterior Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

La FMP fue establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en respuesta a una solicitud de varios países, incluyendo Estados Unidos, para ayudar a Haití a superar la crisis. La fuerza estaba compuesta principalmente por tropas de Estados Unidos, pero también contó con la participación de otros países.

La FMP desempeñó un papel importante en la estabilización de Haití durante un período de gran inestabilidad política y violencia. Su presencia ayudó a crear un entorno más seguro para que las autoridades haitianas pudieran retomar el control del país y comenzar a reconstruir la economía.

La MINUSTAH, sucesora de la FMP, fue establecida en 2004 y continuó la labor de estabilización y apoyo a Haití hasta 2017. La MINUSTAH fue una misión de las Naciones Unidas que se centró en el restablecimiento de la seguridad, la promoción de procesos políticos transparentes, la protección de los derechos humanos y el apoyo a las instituciones gubernamentales haitianas

Con este vacío de poder Haití quedó sumido en el caos y ni la presencia de una nueva Misión de Naciones Unidas, ni las gestiones del nuevo presidente Boniface Alexandre consiguieron evitar los más de 2.000 muertos que la climatología, junto con las revueltas, dejaron a su paso por las tierras haitianas.

El Punto de Inflexión (2004 - 2010)

En 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en un violento levantamiento, sumiendo al país en el caos. Bandas armadas, muchas formadas por ex-militares o antiguos partidarios políticos, comenzaron a controlar barrios enteros.



En junio de 2005, 9.400 efectivos de la ONU preparaban el camino para celebrar los comicios generales presidenciales que el 7 de febrero de 2006 le dieron la victoria al partido La Esperanza y con él a su candidato René Préval. Las iniciativas del Secretario General de la ONU junto a la predisposición de los países cooperantes en MINUSTAH hicieron que se prorrogase la Misión con objeto de estabilizar la situación y de fortalecer con nuevos aires a la policía haitiana.

De conformidad con la Constitución vigente de 1987, Boniface Alexandre, Presidente del Tribunal Supremo, fue nombrado Presidente provisional. A mediados de marzo, un Consejo de Sabios de siete miembros representativos de los sectores claves de la sociedad haitiana, nombró Primer Ministro a Gérard Latortue. El Gobierno provisional cesará en sus funciones el 7 de febrero de 2006, entregando el mando al nuevo Presidente electo, tras la celebración de elecciones municipales, legislativas y presidenciales (en principio previstas para diciembre de 2005 y enero de 2006). Desde la Administración Alexandre Latortue se lanza a la iniciativa del Diálogo Nacional, con vistas a propiciar el acercamiento entre las distintas formaciones políticas (incluido Fanmi Lavalás, partido del ex Presidente Aristide) y con el fin de lograr, desde una aproximación democrática, la necesaria estabilidad institucional en el periodo de transición, tras los comicios de finales de año y principios del siguiente.

Durante 2009, el país ha seguido por un lado un camino de estabilización política, incluyendo un cambio de gobierno que no ha provocado las tensiones de antaño, y por otro un aumento de la inseguridad ciudadana que ni las fuerzas de seguridad haitianas, ni las fuerzas de MINUSTAH pueden atajar. Ha aumentado el número de secuestros, tanto de turistas como de residentes de otros países, produciéndose frecuentes robos y asaltos en los barrios residenciales. Persistieron los motivos de preocupación respecto a la seguridad pública. La implicación de agentes de policía corruptos, en secuestros hizo que se remarcaran los llamamientos en favor de someter a una investigación exhaustiva a la Policía Nacional de Haití. En abril, entre manifestaciones de protesta por el aumento del precio de los alimentos básicos, y después de que prosperara en el Senado una moción de censura, el primer ministro Jacques-Édouard Alexis se vio obligado a dimitir. Comercios y escuelas tuvieron que



cerrar como consecuencia de los saqueos y los actos de violencia registrados durante las manifestaciones.

El país estuvo cuatro meses sin un gobierno efectivo, lo que paralizó proyectos de desarrollo esenciales e impidió aprobar los presupuestos del Estado. En julio, el Senado y la Cámara de Diputados ratificaron a Michèle D. Pierre-Louis como primera ministra. El aplazamiento hasta 2009 de las elecciones para renovar un tercio del Senado –cuya celebración estaba prevista para el primer trimestre de 2008– puso en peligro la capacidad del Estado de legislar, pues en muchas sesiones no había quórum en la Cámara Alta. A principios de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por quinto año el mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH). A mediados de este mes cuatro huracanes pasaron por Haití, sumiendo durante unos días al país en el caos. El día 20 diversas mociones de censura del Senado provocaron la dimisión de la primera ministra, lo que llevó al presidente Préval a la remodelación del Gabinete ministerial.

El 7 de noviembre es nombrado primer ministro Jean Max Bellerive, anterior ministro de Economía y el 29 de ese mismo mes toma posesión el nuevo gabinete. El 1 de enero de 2010, Préval prometió unas elecciones imparciales para el 28 de febrero, aunque no habló de la exclusión de quince grupos políticos. Los opositores acusan al consejo electoral designado por la presidencia de favorecer al nuevo Partido Unidad, de Préval.

El Terremoto y el Colapso (2010 - 2021)

El devastador terremoto de 2010 empeoró todo. Más de 200,000 personas murieron, y el Estado colapsó. La ayuda internacional llegó, pero gran parte fue mal gestionada o robada. Las bandas criminales se fortalecieron, aprovechando el caos para traficar armas, secuestrar y controlar territorios.

El 12 de enero de 2010 la capital de Haití quedó bajo los escombros. En pocos segundos, un movimiento sísmico de 7 grados en la escala de Richter dejó el 65% de las construcciones en la zona metropolitana de Puerto Príncipe-Pétionville totalmente colapsadas o con un alto grado de destrucción. Más de 200.000 personas perdieron la vida y más de dos millones quedaron en la calle. El centro de comando de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) también



colapsó, dejando sin cabeza a la fuerza de militares de múltiples banderas que operaba en el país.

El presidente, René Préval, vio cómo el Palacio de Gobierno, para muchos emblema de la añorada belleza que un día tuvo la ciudad, se hundía de repente. El primer ministro, Jean-Max Bellerive, salió a recorrer la ciudad para evaluar el daño subido a un mototaxi, con el cual fue a buscar a los funcionarios del gobierno para iniciar las tareas de coordinación de la crisis. El Palacio de los Ministros colapsó, las oficinas de la Protección Civil quedaron inservibles y su personal fue privado de los mínimos medios de coordinación, igual que los alcaldes de las comunas afectadas y los responsables locales de protección civil. Por la hora del sismo (poco antes de las cinco de la tarde), una gran cantidad de funcionarios importantes se encontraba aún en sus centros de trabajo; muchos perdieron la vida.

En resumen, el peor escenario posible: un desastre de proporciones superlativas que afectó de lleno al centro del poder.

Pero el desastre en Haití no fue el movimiento sísmico. El verdadero problema no fue una falla que se movió lateralmente y que con toda certeza lo seguirá haciendo en los próximos meses y años. La catástrofe son los dos millones de personas que deambulan por las plazas y calles y que viven en espacios precarios superpoblados, con escasos medios de protección contra la intemperie. Es el medio millón de desplazados internos, que hoy nadie sabe adónde y en qué condiciones están, ni en qué medida se han llevado consigo, entre sus ropas, el riesgo del que huyen, con sus necesidades perennemente insatisfechas.

El desastre en Haití es una población mayoritariamente pobre que hoy se encuentra en las peores condiciones de inseguridad, condiciones que antes del sismo caracterizaban sobre todo las zonas de exclusión más violenta de los asentamientos precarios de Carrefour Feuilles, Bel Air o Cité Soleil, entre otros. Hoy, miles de personas que luchaban diariamente por alejarse de esa realidad de espanto se encuentran sumidas en ella, en la marginalización extrema, la insalubridad y la intemperie; la desesperanza de quienes tocan fondo.

La misma información científica sirve para constatar estas aseveraciones: en la historia reciente, pocos eventos sísmicos de una escala similar habían provocado



una cantidad de muertos y daños tan importantes como los que acontecieron en Haití. Los efectos del sismo superaron los de todos los terremotos que se han registrado desde 1900, aun aquellos que registraron magnitudes mucho mayores. La información científica, aún en proceso de estudio, indica que la liberación máxima de energía del terremoto estuvo orientada hacia las zonas de Léogane, Petit Goâve y Grand Goâve, hacia el suroeste de Puerto Príncipe, mientras que la ciudad estuvo sometida a una descarga de energía sensiblemente menor. Los especialistas coinciden en que la intensa destrucción tiene más que ver con la densidad urbana y el modo de construcción de viviendas que con la distribución de la energía sísmica.

Por eso, entender las razones que han generado estos efectos permitirá comprender mejor lo que sucedió en Haití, identificar sus causas y analizar hasta qué punto su población se encuentra hoy en un riesgo mayor al del pasado. La clave es el desarrollo. El Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres señala que «los países más pobres se ven afectados por riesgos de mortalidad y de pérdidas económicas en grados desproporcionadamente más elevados si se los compara con niveles similares de exposición a amenazas». El informe incluye «estudios de caso en ciudades concretas que indican que tanto la incidencia de desastres como las pérdidas se vinculan con procesos que hacen que aumente la exposición de las personas pobres a amenazas, como por ejemplo la expansión de asentamientos informales en zonas propensas a amenazas».

No es la amenaza física, en este caso la actividad sísmica, lo que determina la magnitud de la catástrofe, sino la exposición de los grupos sociales. Esto es resultado de la estrecha relación entre pobreza y vulnerabilidad, que se sintetiza en el gráfico de la página siguiente y que en el caso haitiano dio como resultado un complejo y elevado riesgo de desastre.

El nexo entre pobreza y riesgo es más que evidente en Haití. Las cifras son elocuentes. Haití es el país más pobre del continente: 80% de su población, antes del sismo, sobrevivía con menos de dos dólares al día. El entorno está degradado a niveles impresionantes, con solo 2% de cobertura forestal y con procesos galopantes de erosión y pérdida de tierras cultivables. La principal fuente de energía es el carbón vegetal, y hasta el momento prácticamente ningún intento de frenar la



deforestación ha sido exitoso. La escasa rentabilidad en la agricultura y la baja competitividad de sus productos de exportación, dadas la inequidad de los aranceles y la injusta protección en los países desarrollados, generan un elevado flujo migratorio, de unas 75.000 personas al año, hacia las ciudades, donde se registra una urbanización caótica y desenfrenada, con procesos de construcción anárquicos y sin ningún control. Los cerros de la ciudad estaban cubiertos de pequeñas viviendas construidas en un cemento pesadísimo y de mala calidad, aglomeradas unas encima de las otras. Muchos edificios de más de cinco pisos, producto de incipientes procesos de inversión extranjera, comenzaban a alterar el paisaje urbano, la mayoría de los cuales también se vio afectada por la mala calidad de su construcción. Por otra parte, Haití cuenta con un Estado débil, permanentemente afectado por crisis políticas y conflictos, muchos de ellos determinados por intereses extranjeros, que generan condiciones de escasa gobernabilidad y corrupción.

Pero, más allá de este panorama general, hay que distinguir los factores globales y subyacentes del riesgo, cuya configuración se analiza en el gráfico. En primer lugar, el riesgo cotidiano (la población expuesta a la inseguridad alimentaria, enfermedades, delincuencia, etc.) que afectaba a una abrumadora mayoría de haitianos. Paralelamente, un riesgo extensivo, que también afectaba a la población más dispersa, exponiéndose a miles de impactos de pequeña escala, pero altamente significativos para sus medios de vida. Fue este riesgo extensivo, presente en toda la zona rural, el que generó una presión permanente sobre los centros urbanos, con altas tasas de inmigración, que elevaron la densidad urbana y la exposición al desastre. Y, por último, el riesgo intensivo, que se ha hecho manifiesto en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, con las características extremas que ya se han visto.

Claramente, el desastre que se inició el 12 de enero a las 16:53 no se generó en el subsuelo haitiano: la causas estaban en la superficie y siguen ahí, ancladas en el desarrollo histórico, la exclusión y la configuración espacial del área metropolitana de Puerto Príncipe y Pétienville.

Celebradas finalmente las elecciones el 28 de noviembre de 2010, casi 5 millones de haitianos acudieron a las urnas para elegir al nuevo presidente, renovar 11 de las



30 bancas del senado y la totalidad de la Cámara de Diputados de 99 escaños. Dos de los 18 candidatos pasan a la segunda vuelta. Los datos presentados por el CEP otorgaron la victoria a la profesora y ex primera dama Mirlande Manigat, con un 31,37% de los votos; el segundo, a Jude Celestin, con 22,48%, y el tercero al cantante Michel Martelly, con 21,84%, que quedaba así excluido de la segunda vuelta. Pero el informe de la OEA echa por tierra ese recuento, en buena parte por los fraudes detectados. «Se recomienda que el candidato que quedó en tercer lugar (Martelly) pase al segundo lugar, y el que quedó en segundo puesto (Celestin) pase a ocupar la tercera plaza», indica el documento. Para la OEA, los ganadores son Manigat y Martelly, y deben ser ellos quienes se enfrenten en una segunda vuelta.

En Haití, las dramáticas deficiencias policiales han llevado a los ciudadanos de a pie a administrar su propia forma de justicia mediante linchamientos de presuntos delincuentes. Con un ejército desmovilizado, una fuerza policial destruida por una corrupción galopante y con sólo 4.000 hombres (en su mayoría mal preparados), debe custodiar a una población de unos diez millones de habitantes. Haití es por ello, entre otros motivos, un país donde no existe la ley. Esto ha generado un boom del negocio de la seguridad privada y un aumento corrosivo del crimen y la delincuencia, con una media de 50 muertes al mes. Cabe añadir la creciente influencia del narcotráfico en el país, el aumento de la criminalidad, la destrucción medioambiental y la incidencia de la desnutrición infantil y el analfabetismo para completar un retrato realmente negativo de la situación en Haití. Haití ha firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire. Respecto al tráfico de drogas, Haití figura entre los principales países de producción y tránsito de drogas junto a otros 2276. En este clima de inestabilidad permanente, el narcotráfico ha echado raíces profundas, afectando al sistema judicial y a las fuerzas policiales, aprovechado por los traficantes colombianos que utilizan Haití como puente para llevar la droga a Estados Unidos.

destruyó infraestructura crítica, sino que pulverizó lo poco que quedaba de capacidad estatal. Como documenta el académico Mark Schuller en *Killing with Kindness* (2012), la avalancha de ayuda internacional - más de \$13 mil millones



prometidos - terminó beneficiando más a ONGs y contratistas extranjeros que al propio gobierno haitiano, debilitando aún más sus instituciones. En este contexto de vacío de poder, el entonces presidente René Préal vio su autoridad erosionarse dramáticamente, mientras emergían nuevas redes criminales en los campamentos de desplazados.

Las elecciones de 2010-2011, consideradas "las más sucias de la historia" por el Observatorio Caribeño de Elecciones, llevaron al poder a Michel Martelly, un cantante de kompa sin experiencia política. Su gobierno (2011-2016), analizado en profundidad por la investigadora Jemima Pierre (*Haiti: From Revolutionary Slaves to Powerless Citizens*, 2020), se caracterizó por una corrupción desenfrenada y el resurgimiento de grupos paramilitares. El informe Barreras de Hierro del Instituto de Justicia y Democracia en Haití (2015) reveló cómo Martelly armó milicias urbanas para intimidar opositores, mientras desviaba fondos de la reconstrucción - incluyendo \$2 mil millones del Petrocaribe venezolano, según auditorías posteriores. Fue en este periodo que pandillas como G9 y G-Pèp comenzaron a reorganizarse bajo protección política, controlando barrios como Cité Soleil y La Saline.

La llegada de Jovenel Moïse al poder en 2017 (en elecciones con solo 18% de participación) profundizó la crisis. Como detalla el International Crisis Group en *Haiti: The Gang Threat to Democracy* (2019), Moïse gobernó mediante decretos tras disolver el Parlamento en 2020, mientras su círculo íntimo (especialmente el empresario Joël Vorbe) era vinculado al financiamiento de pandillas por investigaciones periodísticas de *Haïti Liberté*. La violencia escaló a niveles sin precedentes: según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), los asesinatos aumentaron un 200% entre 2017-2021, con masacres como la de Bel-Air (noviembre 2020), donde 45 personas murieron en operativos con participación policial.

◆ Problema actual y cooperación internacional:

Haití se encuentra sumido en una espiral de violencia sin precedentes, donde el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza frente a pandillas cada vez más poderosas. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2024), el país ocupa el puesto 172 de 180 en el Índice de Percepción de



Corrupción de Transparencia Internacional, lo que refleja el profundo deterioro institucional que alimenta esta crisis. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 marcó un punto de inflexión, dejando al país sin liderazgo legítimo y exponiendo la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder. Hoy, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2024), más del 80% de Puerto Príncipe está bajo control de grupos armados.

La Policía Nacional de Haití, con apenas 14,000 efectivos para una población de más de 11 millones (según cifras de la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Haití - BINUH, 2023), está sobrepasada y, en muchos casos, infiltrada por las mismas pandillas que debería combatir. Datos de las Naciones Unidas revelan que al menos un tercio de los agentes han abandonado sus puestos en los últimos años. El sistema judicial es igualmente disfuncional: informes del PNUD indican que menos del 10% de los casos llegan a sentencia.

Grupos como el G9, liderado por el exagente policial Jimmy "Barbecue" Chérizier, han desarrollado tácticas cada vez más sofisticadas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) reportó en 2023 que los secuestros masivos aumentaron un 130%, con al menos 1,500 casos registrados ese año. Además, han diversificado sus fuentes de ingreso mediante el tráfico de armas, el narcotráfico y la extorsión generalizada. Un informe del Panel de Expertos de la ONU sobre Haití (2023) reveló que el 80% de las armas que llegan a Haití provienen de Estados Unidos, muchas de ellas desviadas desde Florida. Estas armas no solo alimentan la violencia local, sino que también fortalecen a grupos que ahora operan con estructuras casi militares. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que las actividades ilícitas de estas pandillas generan más de 400 millones de dólares anuales. Peor aún, existe evidencia documentada por la BINUH de que sectores políticos y empresariales haitianos mantienen vínculos con estos grupos, utilizando su poder para reprimir opositores y controlar territorios.

El deterioro institucional es total. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2023), el Poder Judicial está paralizado: el 90% de los jueces no acuden a trabajar por amenazas, y las cárceles —como la sobrepoblada



Penitenciaria Nacional— son controladas de facto por reclusos armados. La Policía Nacional (PNH), según datos de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, 2024), ha perdido el 40% de su personal en tres años, mientras pandillas como 400 Mawozo y Kraze Baryè dominan el tráfico de armas y secuestros. Un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos de Haití (2023) calcula que estos grupos generan \$500 millones anuales mediante extorsión y narcotráfico, con conexiones internacionales que llegan a República Dominicana y Jamaica.

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), desplegada entre 2004 y 2017, dejó un legado controversial según reportes de UNICEF y organizaciones de derechos humanos. Su sucesora, la BINUH, establecida en 2019, ha tenido un impacto limitado según sus propios reportes. En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva misión multinacional liderada por Kenia, pero datos recientes muestran que su despliegue ha sido lento.

Programas como los del PNUD para reintegrar ex pandilleros, que según sus registros solo ha logrado beneficiar a 500 personas en 2023, enfrentan enormes desafíos. La comunidad internacional ha sido lenta en actuar: el llamamiento humanitario para Haití en 2024 sólo ha recibido el 30% de los fondos necesarios a mitad de año según OCHA.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) enfatiza que sin alternativas para los 1.4 millones de niños que no pueden asistir a la escuela debido a la violencia, el ciclo de reclutamiento continuará. Los datos son claros: con más de 4,789 homicidios reportados en 2023 (UNODC), un aumento del 47% respecto al año anterior.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha mantenido una presencia constante pero polémica en Haití desde antes del terremoto de 2010. Bajo el liderazgo del secretario general Luis Almagro, la OEA impulsó en 2016 una misión de observación electoral que validó los cuestionados comicios que llevaron a Jovenel Moïse al poder, decisión que según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) contribuyó a legitimar un proceso viciado por irregularidades. En los años siguientes, la organización implementó el Programa de Apoyo a la



Gobernabilidad Democrática, que según reportes internos gastó \$15 millones entre 2017-2021 en reformas constitucionales y capacitación judicial, con resultados mínimos ante el colapso del sistema legal haitiano. La OEA también estableció en 2020 el Grupo de Trabajo sobre Haití, cuyas recomendaciones (incluyendo sanciones a líderes pandilleros) fueron implementadas sólo parcialmente por los estados miembros.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha jugado un rol clave en el financiamiento de infraestructura crítica. Entre 2010-2022, aprobó \$2.300 millones en préstamos para proyectos como la reconstrucción de carreteras y sistemas de agua potable, pero una auditoría de 2023 realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión del propio BID encontró que el 60% de estos fondos no lograron impactos sostenibles debido a la corrupción local y la falta de supervisión. Su iniciativa estrella, el Programa de Seguridad Ciudadana (2018-2021) que dotó de equipos tecnológicos a la PNH, colapsó cuando el 70% de los equipos dejaron de funcionar por falta de mantenimiento, según admitió un informe confidencial obtenido por el medio Enquet'Action.

La Unión Europea, por su parte, canalizó €420 millones entre 2010-2023 a través del Fondo Europeo de Desarrollo, concentrados en educación y justicia. Sin embargo, como documentó el European Court of Auditors en 2022, el 80% de las escuelas construidas con estos fondos en zonas conflictivas nunca abrieron regularmente debido a la inseguridad. Su programa de apoyo al sistema penitenciario (€25 millones en 2015-2018) terminó con solo 2 de 10 cárceles remodeladas, mientras el hacinamiento carcelario aumentaba al 454%, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A nivel regional, la Comunidad del Caribe (CARICOM) ha intentado mediar políticamente, organizando tres cumbres extraordinarias sobre Haití entre 2021-2023. Sus esfuerzos por crear un gobierno de transición consensuado fracasaron repetidamente, en parte por divisiones internas: mientras Jamaica y Bahamas abogaban por intervención militar, países como San Vicente y las Granadinas se oponían rotundamente. El único resultado concreto fue la creación en 2022 del Grupo de Eminentis Personas Caribeñas, cuyo plan de 50 puntos para Haití quedó en letra muerta ante la falta de financiamiento.



Organizaciones no gubernamentales internacionales han complementado (y en ocasiones suplantado al Estado haitiano). Médicos Sin Fronteras, operando en Haití desde 1991, gestiona el 40% de las emergencias traumáticas según su informe 2023, mientras el International Rescue Committee provee el 60% de los servicios a víctimas de violencia sexual en Puerto Príncipe. Estas intervenciones, aunque vitales, han creado lo que la antropóloga Chelsey Kivland (Dartmouth College) denomina "un Estado paralelo NGOcéntrico", donde la ayuda humanitaria termina perpetuando la dependencia externa.

La Cruz Roja Internacional ha documentado cómo esta proliferación de actores internacionales (cada uno con sus propias agendas) genera duplicación de esfuerzos y confusión. Su informe de coordinación 2022 identificó 14 mapas diferentes de territorios controlados por pandillas, creados por distintas agencias, lo que dificulta cualquier estrategia unificada. Mientras tanto, como advierte el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), esta cacofonía internacional ha permitido a las élites haitianas manipular a los donantes, obteniendo fondos sin implementar reformas reales, un juego peligroso que sigue alimentando la crisis mientras el país se hunde más en el caos.

Iniciativas Domésticas:

El gobierno de René Préval (2006-2011), en sus últimos meses tras el sismo, intentó reorganizar las fuerzas de seguridad a través del Plan Nacional de Seguridad Pública, que buscaba aumentar los efectivos policiales y mejorar su equipamiento. Sin embargo, como documentó el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), estos esfuerzos se vieron socavados por la fuga de personal calificado y la falta de fondos, con apenas 9,000 policías para todo el país en 2011, muchos de ellos sin entrenamiento adecuado para enfrentar a las cada vez más armadas pandillas urbanas.

La administración de Michel Martelly (2011-2016) optó por un enfoque más agresivo pero controvertido. Creó la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), una división



especial de la Policía Nacional (PNH) entrenada para operaciones antigang, que llevó a redadas espectaculares en barrios como Grand Ravine y Martissant. No obstante, según informes de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), estas operaciones frecuentemente derivaron en ejecuciones extrajudiciales y violencia indiscriminada, exacerbando la desconfianza ciudadana. Paralelamente, Martelly impulsó el Programa de Desarme Voluntario, que recogió menos de 500 armas en tres años, un fracaso atribuible según el Instituto de Estudios Estratégicos de Haití a la falta de incentivos reales y protección para quienes entregaban armas.

Con la llegada de Jovenel Moïse (2017-2021), la estrategia dio un giro más militarizado. En 2019, mediante decreto presidencial, se creó la Brigada Especial de Seguridad Territorial (BEST), unidad de élite de la PNH dotada de vehículos blindados y armamento pesado. Aunque logró algunos éxitos temporales, como la captura del líder pandillero Arnel Joseph en 2020, un análisis interno de la PNH obtenido por el medio AyiboPost reveló que el 40% de su equipamiento quedó inutilizable por falta de mantenimiento en menos de dos años. Moïse también intentó revivir la disuelta Fuerza Armada de Haití en 2018, proyecto que quedó en apenas 500 reclutas sin capacidad operativa real, según reportes del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Haití.

En el ámbito judicial, los gobiernos post-2010 implementaron medidas igualmente problemáticas. El Sistema de Justicia de Urgencia (2012), diseñado para acelerar procesos penales, colapsó por sobrecarga, con tasas de condenas inferiores al 5% según estadísticas del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe. La creación de Cortes Especiales contra el Crimen Organizado (2015) fracasó ante amenazas a jueces y fiscales; el emblemático caso del asesinato del periodista Néhémie Joseph (2019) quedó archivado tras la retirada de tres fiscales consecutivos.

La policía haitiana, por su parte, desarrolló tácticas innovadoras pero insuficientes. El programa "Policía de Proximidad" (2014), que buscaba mejorar relaciones comunitarias, sólo cubrió el 15% de los barrios prioritarios por falta de recursos. La División de Investigación de Secuestros (DAS) logró reducir este delito en 30% entre



2018-2019, según sus propios reportes, pero recayó ante el asesinato de varios de sus agentes. Incluso medidas tecnológicas como el Sistema de Comando de Incidentes (2016) se vieron limitadas: el centro de monitoreo con 200 cámaras en Puerto Príncipe solo funcionaba parcialmente por cortes de energía, como admitió un informe interno de la PNH en 2020.

Estos esfuerzos nacionales, aunque significativos, se vieron sistemáticamente minados por tres factores estructurales: la corrupción endémica (el 60% de los fondos para seguridad se desviaban según auditorías de 2018), la infiltración pandillera (la PNH estima que 1 de cada 10 agentes colaboraba con bandas en 2021), y la crónica falta de financiamiento (el presupuesto policial nunca superó el 2% del PIB). Como concluyó un estudio del Observatorio Haitiano de Seguridad (2022), estas medidas "actuaron como paliativos temporales, sin atacar las raíces económicas y políticas del crimen organizado", dejando al país en una espiral de violencia que las instituciones nacionales, por sí solas, no han podido detener.



Preguntas Orientadoras:

¿Cómo se puede innovar estratégicamente en cuanto al desarme en el contexto de Haití entendiendo las limitaciones institucionales que existen?

¿Qué necesita Haití de la comunidad internacional para poder llevar a cabo un desarme de los grupos criminales?

¿Cuáles son las limitaciones del DISEC en cuanto a esta temática? Entendiendo eso, ¿Que realmente se puede hacer sin salirse del mandato de esta comisión?

¿Que no ha funcionado en cuanto a las medidas particulares que ha tomado Haití?

¿Cual es la mayor limitante de la comunidad internacional? (en general)

¿Si se pudiese encauzar este debate a un Objetivo de Desarrollo Sostenible, cuál sería?



Definiciones Claves

1. BINUH - Misión Integrada de las Naciones Unidas en Haití (2019-presente), sucesora de la MINUSTAH, enfocada en gobernanza y derechos humanos.
2. G9 an Fanmi e Alye - Coalición de 9 pandillas haitianas liderada por Jimmy "Barbecue" Chérizier, controla el 80% de Puerto Príncipe (UNODC, 2023).
3. MINUSTAH - Misión de Estabilización de la ONU en Haití (2004-2017), criticada por abusos sexuales e introducción del cólera.
4. Petrocaribe - Programa venezolano de ayuda energética cuyos fondos (\$2 mil millones) fueron desviados según auditorías (2017-2019).
5. PNH - Policía Nacional de Haití, con solo 14,000 agentes para 11 millones de habitantes y altos índices de infiltración pandillera (BINUH, 2023).
6. 400 Mawozo - Pandilla especializada en secuestros masivos, responsable del 30% de casos en 2021 (OCHA).
7. Tonton Macoutes - Milicia paramilitar de la era Duvalier (1957-1986), antecedente histórico de las actuales pandillas políticas.
8. Corrupción Sistémica - La corrupción sistémica, o corrupción endémica, se refiere a la corrupción que se deriva de las debilidades de un sistema u organización, no de la acción de individuos corruptos. En otras palabras, la corrupción está arraigada en el sistema mismo, en sus estructuras e instituciones, lo que la hace difícil de erradicar.
9. G-Pèp - Pandilla rival del G9, controla zonas estratégicas como Martissant.
10. BEST - Brigada Especial de Seguridad Territorial, unidad élite de la PNH creada en 2019 con resultados limitados.
11. UMO - Unidad de Mantenimiento del Orden, división policial de la era Martelly acusada de ejecuciones extrajudiciales.



12. CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentó hacinamiento carcelario (454%) y colapso judicial.
13. RNDDH - Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos, principal fuente de datos sobre violencia estatal y masacres.
14. Cólera ONU - Epidemia introducida por cascos azules nepaleses en 2010 que causó 10,000 muertes (OMS).
15. Secuestros Express - Táctica criminal que aumentó 130% en 2023 (1,500 casos, UNODC).
16. Tráfico ilícito de Armas - Importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquier Estado Parte concernido no lo autoriza.
17. Estado Fantasma - Término acuñado por Laurent Dubois para describir la ausencia de instituciones funcionales.
18. Élités parasitarias - Sectores empresariales/políticos que financian pandillas para control territorial (Investigación AyiboPost).
19. NGOcracia - Sistema donde ONGs suplantán al Estado (ej: 60% servicios básicos provistos por extranjeros).
20. FAD'H - Fuerza Armada de Haití, disuelta en 1995 y recreada parcialmente por Moïse en 2018 sin capacidad real.
21. Cortes Especiales - Tribunales anticrimen organizado creados en 2015 que fracasaron por amenazas a jueces.
22. Plan Nacional de Seguridad - Estrategia post-terremoto 2010 que no superó fase inicial por falta de fondos.
23. CARICOM - Bloque regional que intentó sin éxito mediar en crisis política (2021-2023).



24. AyiboPost - Medio investigativo haitiano que expuso vínculos empresarios-pandillas.
25. La Saline - Barrio de Puerto Príncipe escenario de masacres con participación policial (RNDDH, 2018).
26. Desarme Voluntario - Programa fallido de Martelly que recolectó solo 500 armas en 3 años.
27. Economía de la Extorsión - Pandillas generan \$400 millones anuales (UNODC, 2024).
28. Puerto de Puerto Príncipe - Controlado por G9, punto clave para el tráfico de armas y mercancías.
29. Escuadrones de la Muerte - Grupos parapoliciales reaparecidos desde 2018 (documentados por CARDH).
30. Consejo de Transición - Propuesta internacional para gobierno interino, rechazada por sectores haitianos.

◆ Conclusión

La situación en Haití representa un fracaso histórico tanto de sus élites políticas como de la comunidad internacional, un caso de estudio sobre cómo las buenas intenciones mal implementadas pueden agravar los problemas que pretendían resolver. Durante más de dos décadas hemos visto ciclos repetitivos: intervenciones internacionales bien financiadas pero mal concebidas, gobiernos haitianos corruptos e ineficaces, y una población civil atrapada en medio de una violencia que no cesa. Los números hablan por sí solos, más de 4,700 homicidios sólo en 2023, el 80% de la capital bajo control de pandillas, instituciones estatales que existen sólo nominalmente. Lo más trágico es que esta crisis era previsible y, en muchos



aspectos, prevenible. Las señales de alerta estaban allí desde hace años: la infiltración de las pandillas en las estructuras estatales, el desvío sistemático de fondos públicos, el colapso gradual del sistema judicial. Sin embargo, tanto el gobierno haitiano como los actores internacionales optaron por soluciones cosméticas que trataban los síntomas sin atacar las causas profundas del problema. La policía haitiana, mal equipada y peor pagada, ha sido abandonada a su suerte frente a pandillas cada vez mejor armadas. Los programas de desarrollo han beneficiado más a las ONGs internacionales que a los haitianos comunes. Las misiones de paz han venido y se han ido, dejando tras de sí más problemas que soluciones. Hoy Haití se encuentra en un punto de inflexión crítico. Las pandillas ya no son simplemente grupos criminales, sino actores políticos con capacidad de veto sobre cualquier iniciativa de gobierno. El estado de derecho existe más en los discursos diplomáticos que en las calles de Puerto Príncipe. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la resistencia silenciosa del pueblo haitiano continúa. En los barrios marginados, en las organizaciones comunitarias, en las iniciativas locales de paz, hay semillas de esperanza que podrían florecer si alguna vez reciben el apoyo adecuado. El camino hacia la reconstrucción será largo y doloroso, pero no imposible. Requerirá algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia: voluntad política genuina, tanto de las autoridades haitianas como de la comunidad internacional, para enfrentar no solo la violencia visible de las pandillas, sino también la violencia invisible de la corrupción, la desigualdad y la indiferencia global. Mientras tanto, Haití sigue esperando que su grito de ayuda sea finalmente escuchado y comprendido en toda su urgencia y complejidad.

◆ Bibliografía

1. Amnistía Internacional. (2023). Haití: La crisis de derechos humanos en un estado fallido. <https://www.amnesty.org>
2. Banco Interamericano de Desarrollo. (2023). Informe de evaluación: Proyectos en Haití 2010-2023. <https://www.iadb.org>
3. BINUH (Misión Integrada de Naciones Unidas en Haití). (2024). Reporte trimestral sobre seguridad y derechos humanos. <https://binuh.unmissions.org>



4. CARDH (Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos). (2023). Corrupción y violencia institucional en Haití.
5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Situación carcelaria y sistema judicial en Haití. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 45.
6. Dubois, L. (2021). Haiti: The aftershocks of history. Metropolitan Books.
7. Fatton, R. (2022). Haiti: Trapped in the outer periphery. Lynne Rienner Publishers.
8. Grupo de Expertos de la ONU sobre Haití. (2023). Informe final sobre tráfico de armas y financiamiento de pandillas. A/HRC/52/75.
9. International Crisis Group. (2023). Haiti: The gang threat to democracy. Report No. 325.
10. Kivland, C. (2022). Street sovereignty: Gangs and governance in Port-au-Prince. Cornell University Press.
11. Observatoire Haïtien de Sécurité. (2024). Statistiques sur la violence armée 2020-2023.
12. OEA (Organización de los Estados Americanos). (2021). Informe de la misión de observación electoral en Haití. OEA/Ser.G.
13. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2024). Estudio global sobre homicidios: Caso Haití. UNODC.
14. Panel de Expertos de la ONU. (2023). Tráfico de armas hacia Haití: Rutas y redes. S/2023/521.
15. Pierre, J. (2020). Haiti: From revolutionary slaves to powerless citizens. Routledge.
16. PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). (2024). Índice de gobernabilidad en Haití. <http://hdr.undp.org>
17. RNDDH (Réseau National de Défense des Droits Humains). (2023). Rapport sur les massacres et violations des droits humains.
18. Schuller, M. (2012). Killing with kindness: Haiti, international aid, and NGOs. Rutgers University Press.
19. Transparencia Internacional. (2023). Índice de Percepción de Corrupción. <https://www.transparency.org>
20. UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). (2024). Análisis de economías criminales en el Caribe.
21. Wilson Center. (2024). Haiti's governance crisis: Pathways forward. Latin America Program.

